

Santiago, nueve de agosto de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

Que, ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se llevó a efecto la audiencia de juicio, en procedimiento de aplicación general, en los autos **RIT I-89-2023**, por reclamación judicial de multa administrativa conforme al artículo 503 del Código del Trabajo.

La reclamación fue interpuesta por don Francisco Plass Montalva, abogado, cédula de identidad N°13.828.571-5, en representación de **TRESMONTES S.A.**, RUT N° 76.388.064-8, ambos domiciliados, para estos efectos, en Enrique Foster Sur N°372, comuna de Las Condes.

A su vez, la reclamación fue interpuesta en contra de la **INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO LA FLORIDA**, representada legalmente por su Jefe, don Marco Antonio Riquelme Aravena, ambos domiciliados en Walker Martínez N°368 (Paradero 14), comuna de La Florida.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, comparece don Francisco Plass Montalva, abogado, en representación de **TRESMONTES S.A.**, quien interpone reclamación judicial de multa administrativa, conforme al artículo 503 del Código del Trabajo, en contra de la **INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO LA FLORIDA**, representada legalmente por su Jefe, don Marco Antonio Riquelme Aravena.

Fundamenta su reclamación señalando que el día 30 de diciembre del 2022, el fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo La Florida, don Gerardo Neftali Aguayo Zamorano, cursó la Resolución de Multa N°1782/22/56, la cual contiene la multa que solicita sea dejada sin efecto.

Indica que la multa en cuestión se formuló en los siguientes términos: *“1.- No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: - Contratos de trabajo y anexos. - Comprobantes de pago de remuneraciones desde mayo de 2022 hasta octubre de 2022, ambos meses inclusive. - Registro de asistencia mismo periodo anterior. – Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales del mismo periodo anterior. Lo anterior respecto a los siguientes trabajadores: Ester Tapia Araya, RUN 12.847.840-K Valentino Tapia Catalán, RUN 9.984.755-7 María Torres Torres, RUN 14.075.295-9 Luis Uribe Pacheco, RUN 7.934.258-0 Alex Tudela Polanco, Run 12.900.848-2 Paulina Veas Acevedo, RUN 15.719.585-9 María Vega Soto, RUN 15.719.585-9 Matías Vera Trenquin, RUN 19.142.204-K Camila Vidal Aranda, RUN 17.809.273-1 Luis Villalón Silva, RUN 20.171.862-7”.*

Señala que por tales consideraciones, se cursó una multa a su representada en razón de 26,83 IMM, ascendente a la fecha de la infracción a \$6.891.957, estimándose infringido el artículo 31 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el artículo 32 de la misma normativa, el artículo 8 de la Ley N°18.018, y el artículo 30 del Decreto Supremo N° 1 de 1982 del Ministerio de Justicia.

Sostiene que el fiscalizador incurre en un error garrafal al cursar la multa, en cuanto sanciona a una empresa por no exhibir la documentación exigida para efectuar las labores de fiscalización, en circunstancias que nunca existió un requerimiento de documentación, ya que el fiscalizador concurrió a unas dependencias que no son de propiedad de su representada.



Explica que de la mera lectura de la Resolución de Multa, se puede apreciar de manera patente el error de hecho en que incurre el fiscalizador, en cuanto la multa señala: “Que con fecha 20 de DICIEMBRE de 2022, en el curso de la fiscalización efectuada por el fiscalizador Sr (a) GERARDO NEFTALÍ AGUAYO ZAMORANO que suscribe, al empleador TESMONTES S.A., R.U.T. 76.388.064-8, con domicilio en VICUÑA MACKENNA 2600, comuna de MACUL, representado legalmente (Art. 4º Código del Trabajo) por NANCY ESCOBARI CUNEO, R.U.T. 10.060.025-0, se constata lo siguiente:”

Hace presente que Tresmontes S.A. no tiene domicilio en Vicuña Mackenna N° 2600 de la comuna de Macul, ni sus trabajadores prestan servicios en dichas dependencias, sino que el domicilio de su representada y los distintos lugares donde se presta servicios, están ubicados en la Región de Valparaíso.

Añade que en la propia plataforma de la Dirección del Trabajo, donde consta el registro de los distintos empleadores, se puede apreciar el siguiente domicilio: Freire 3210-Valparaíso.

Afirma que en razón de lo anterior, llama sumamente la atención de su parte, que un fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, se haya dirigido a dependencias de Vicuña Mackenna para realizar la fiscalización, en circunstancias que tanto el domicilio como las dependencias de su representada se encuentran en la Región de Valparaíso, más aún, si el fiscalizador tiene acceso a la plataforma de la Dirección del Trabajo, por lo que perfectamente podría haber verificado si aquel era realmente el domicilio, o al menos una de las dependencias de Tresmontes S.A., antes de cursar la multa.

Señala, por otro lado, que la referida multa sanciona a Tresmontes por no exhibir la documentación respecto de una serie de trabajadores: Ester Tapia Araya, Valentino Tapia Catalan, María Torres Torres, Luis Uribe Pacheco, Alex Tudelo Polanco, Paulina Veas Acevedo, María Vega Soto, Matias Vera Trenquin, Camila Vidal Aranda y Luis Villalón Silva y agrega que dichos trabajadores efectivamente prestan servicios para su representada, con excepción de Alex Tudela Polanco, respecto del cual su parte no tiene conocimiento alguno.

Agrega que, sin embargo, dichos trabajadores prestan servicios en la Región de Valparaíso, algunos en la planta ubicada en Casablanca y otros en la ciudad de Valparaíso, insertando captura de pantalla de los trabajadores Paulina Jazmín Veas Acevedo; Ester Yolanda Tapia Araya y; Valentino Carmelo Tapia Catalán.

Afirma que como se puede apreciar de las imágenes, que son una muestra del grupo de trabajadores, los contratos de trabajo señalan expresamente que aquellos prestarán sus servicios en los establecimientos de la ciudad de Casablanca o de Valparaíso, según sea el caso, pero ninguno de los contratos de los trabajadores indicados en la multa, señala como lugar de prestación de servicios el indicado en la multa, esto es, Vicuña Mackenna N° 2600, Macul.

Se pregunta cómo es posible que se vaya a fiscalizar a unas dependencias en la cual Tresmontes no tiene domicilio ni los trabajadores individualizados en la multa, prestan servicios en aquella y señala que su parte no lo entiende, ya que difícilmente su representada tendrá la posibilidad de cumplir con el requerimiento de documentación, si se fiscaliza unas dependencias respecto de las cuales no tiene relación alguna.

Destaca que la Resolución de Multa, es el único antecedente con el que cuenta su parte para defenderse de dicha sanción, por lo que entiende que si la



multa en comento, señala como domicilio de su representada el ubicado en Vicuña Mackenna N° 2600, precisamente fue a dichas dependencias a las que concurrió el fiscalizador para exigir la documentación laboral. Añade que, en cualquier caso, el fiscalizador no concurrió a ninguna de las dependencias de Tresmontes S.A. para exigir la documentación que señala no haber exhibido.

A continuación alega una infracción a los principios del acto administrativo, sosteniendo que su representada no puede ser sujeto pasivo del acto administrativo que se le imputa, en cuanto, se está sancionando por no exhibir la documentación para el proceso de fiscalización, en circunstancias que el requerimiento de documentación se realizó en dependencias que no son de propiedad de su representada, ni tiene injerencia alguna en dicho domicilio, infringiendo el fiscalizador los estándares de legalidad del acto administrativo.

Agrega que, a mayor abundamiento, las resoluciones de multas son actos administrativos que derivan de un procedimiento administrativo, agregando que el artículo 21 de la Ley N° 19.880 señala quienes son interesados y afirma que su representada podría enmarcarse dentro del N° 2 de dicha norma en cuanto, podría tener derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, en cuanto parte de los trabajadores individualizados en la multa, prestan efectivamente servicios para Tresmontes S.A.

Menciona que, a su juicio, no puede ser realmente considerada como parte interesada en dichos hechos, en cuanto se está sancionando por no exhibir la documentación exigida para el proceso de fiscalización, en circunstancias que el requerimiento se realizó en dependencias que no son de su representada, por lo que Tresmontes simplemente se vio imposibilitada de cumplir con el requerimiento.

Añade que, por otro lado, se puede considerar la Resolución de Multa como una sanción administrativa y sostiene que la sanción pecuniaria está destinada únicamente a la persona natural o jurídica que ha infringido una disposición legal, reglamentaria o convencional de carácter laboral o previsional y en el caso en concreto, la sanción pecuniaria se está imponiendo por no exhibir toda la documentación exigida, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, de lo cual es presupuesto base, que en un primer momento se haya realizado un requerimiento de documentación, y que acto seguido, su representada se haya negado o haya incumplido con dicho requerimiento, lo que no ocurrió, por lo que es lógico que su representada no puede ser sancionada, en cuanto no ha incumplido ninguna disposición legal, reglamentaria o convencional.

Más adelante sostiene que también se habría infringido el principio de culpabilidad consagrado en el derecho administrativo sancionador, que también es denominado por algunos autores como principio de responsabilidad, que implica la debida comprobación de culpa o dolo por parte del infractor y sostiene que no hay manera alguna que su representada pueda ser autora de la acción u omisión que supone la conducta ilícita, en cuanto el requerimiento de documentación se realizó en Vicuña Mackenna N° 2600, y no en algunas de los establecimientos de su representada.

Solicita que se acoja la reclamación declarando en definitiva: 1. que se deje sin efecto la Resolución de Multa reclamada y; 2. que se condene en costas a la reclamada por no tener fundamento alguno plausible para la aplicación de esta multa.



**SEGUNDO:** Que, la abogada Edith Delgado Hinojosa, en representación de la parte reclamada, **contestó la demanda**, solicitado su rechazo, con costas.

Expone que con fecha 25 de octubre de 2022, ingresó denuncia en la Inspección Comunal del Trabajo de la Florida, solicitando fiscalizar al empleador TRESMONTES S.A. por los siguientes incumplimientos laborales: a) cotizaciones previsionales en las AFP, ISAPRE y AFC (por el seguro de cesantía) y asignación familiar: no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en AFP; b) horas extraordinarias: no pagar las horas extraordinarias; c) informalidad laboral: no entregar comprobante de pago de remuneraciones o entregar sin las indicaciones legales; d) informalidad laboral: no escriturar contrato de trabajo.

Añade que el Trabajador declaró: *“trabajo desde el 2005 para Los Álamos Gestión y Servicio S.A. RUT 77447039-5 que le presta servicio a Tres Montes Lucchetti RUT 76388064-8, hace 10 años me tienen con un contrato irregular que no corresponde a mis funciones y sin anexo de contrato, ahora el 25 de agosto me asaltaron con robo de vehículo de la empresa y ahora nadie se quiere hacer responsable de lo ocurrido, estoy con licencia laboral por estrés y depresión por lo sucedido, sin saber si la empresa me devolverá mis funciones”*.

Afirma que con fecha 7 de diciembre de 2022 el fiscalizador se constituyó en la dirección solicitada por el denunciante (correspondiente a la empresa Lucchetti Chile S.A.), pero ahí informaron que la empresa denunciada no prestaba funciones en dicha dirección.

Añade que dada la información anterior, el fiscalizador, con la misma fecha, 07-12-2022, envió un correo electrónico a la empresa a la casilla de email inscrita por el empleador en la página web de la Dirección del Trabajo con el fin de continuar con el procedimiento por la vía remota. Dicho correo contaba con un acta PI-01-2, "Notificación de Inicio de Procedimiento de Fiscalización" y fue respondido en fecha 09-12-2022 por doña Gianella Onetto.

Sostiene que esta respuesta traía adjunto un poder de representación para que doña Gianella representara a la empresa en este procedimiento de fiscalización.

Señala que posterior a este correo inicial, con fecha 12 de diciembre de 2022, el fiscalizador envió un segundo correo a la empresa, esta vez solicitando la información necesaria para poder fiscalizar los temas denunciados por la persona denunciante.

Menciona que una vez cumplido el plazo para el envío de dicha información (detallada en ítem "Sanciones administrativas), se constató vía revisión de correo electrónico que el empleador no la exhibió.

A continuación, se refiere a los hechos constatados en relación a las materias fiscalizadas:

b.1) Cotizaciones previsionales en las AFP, ISAPRES y AFC (por el seguro de cesantía) y asignación familiar: no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en AFP: La materia no pudo ser fiscalizada dado que el empleador no exhibió la documentación solicitada vía correo electrónico.

b.2) horas extraordinarias: no pagar las horas extraordinarias: La materia no pudo ser fiscalizada dado que el empleador no exhibió la documentación solicitada vía correo electrónico.

b.3) informalidad laboral: no entregar comprobante de pago de remuneraciones o entregar sin las indicaciones legales: La materia no pudo ser



fiscalizada dado que el empleador no exhibió la documentación solicitada vía correo electrónico.

b.4) informalidad laboral: no escriturar contrato de trabajo: La materia no pudo ser fiscalizada dado que el empleador no exhibió la documentación solicitada vía correo electrónico.

c) Conclusiones: 1237-a, no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: contratos de trabajo y anexos; comprobantes de pago de remuneraciones desde mayo de 2022 hasta octubre de 2022, ambos meses inclusive; registro de asistencia mismo periodo anterior; comprobantes de pago de cotizaciones previsionales del mismo periodo anterior. Lo anterior, respecto a todos los trabajadores individualizados en formulario FI-2. Multa: 26, 73 UTM.

Relata que con fecha 30 de diciembre de 2022, se cursa multa, mediante RESOLUCION N°1782/22/56, por los hechos constatados con fecha 20 de diciembre de 2022, en el curso de fiscalización, efectuada por el fiscalizador Sr. Gerardo Neftali Aguayo Zamorano, al empleador Tresmontes S.A, R.U.T. 76.388.064-8, con domicilio en VICUÑA MACKENNA 2600, comuna de Macul, representado legalmente (Art. 4° Código del Trabajo) por Nancy Escobari Cuneo, R.U.T. 10.060.025-0, 5 por: *“1.- No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: - Contratos de trabajo y anexos. - Comprobantes de pago de remuneraciones desde mayo de 2022 hasta octubre de 2022, ambos meses inclusive. - Registro de asistencia mismo periodo anterior. – Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales del mismo periodo anterior. Lo anterior respecto a los siguientes trabajadores: Ester Tapia Araya, RUN 12.847.840-K Valentino Tapia Catalan, RUN 9.984.755-7 María Torres Torres, RUN 14.075.295-9 Luis Uribe Pacheco, RUN 7.934.258-0 Alex Tudela Polanco, Run 12.900.848-2 Paulina Veas Acevedo, RUN 15.719.585-9 Maria Vega Soto, RUN 15.719.585-9 Matias Vera Trenquin, RUN 19.142.204-K Camila Vidal Aranda, RUN 17.809.273-1 Luis Villalon Silva, RUN 20.171.862-7”*.

Explica que de la constatación de los hechos sancionados se dejó constancia en el informe de fiscalización, además de las Resoluciones de Multa, actuaciones que de acuerdo al artículo 23 de D.F.L. N° 2 de 1967 -Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo- gozan de presunción legal de veracidad, que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial; y que en concordancia con lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, determina que la carga de la prueba corresponderá a la reclamante, quien deberá probar que su actuar se ajustó a la legislación laboral vigente.

A continuación, se refiere las disposiciones legales infringidas, transcribiendo los artículos 31 y 32 del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, además del artículo 8 de la Ley N° 18.018 y artículo 30 del D.S. N° 51, de 1982, del Ministerio de Justicia.

Luego, se refiere a las alegaciones de la reclamante, señalando en cuanto a “que nunca le fue requerida la documentación”, que es totalmente contradictorio con las actuaciones realizadas por el fiscalizador, reflejándose en Informe de Fiscalización que transcribe, en términos similares a los ya expuestos.

Sostiene que se evidencia que sí le fue requerida la documentación que no exhibió en la fiscalización, además, de haber tomado conocimiento previamente con





“inicio del fiscalización” y del motivo de la fiscalización, careciendo de sustento factico dicha alegación.

Afirma que la reclamante pretende excusarse de su obligación de exhibir la documentación, válidamente requerida mediante correo electrónico (registrado por la propia empresa en la Dirección del Trabajo), por el hecho de haber concurrido el fiscalizador inicialmente al domicilio indicado en la denuncia, lugar donde señala prestar servicios para la empresa TRESMONTES S.A., R.U.T. 76.388.064-8, lo que claramente, no es argumento válido, puesto que tanto el inicio de fiscalización y requerimiento de documentación se realizó vía remota, al correo electrónico registrado por la empleadora ante de la Dirección del Trabajo- no remitiendo la documentación solicitada por ninguna vía, demostrando con ésta alegación un claro desconocimiento de la normativa laboral vigente; debiendo tener presente que en virtud de la entrada en vigencia de Ley N° 21.327, mediante la cual se moderniza al servicio inspectivo, dotándolo de nuevas atribuciones y obligaciones, entre las cuales figura la interacción electrónica con sus usuarios para notificarlos, citarlos o establecer cualquier tipo de comunicación con ellos. Motivo por el cual, no existió vicios en el procedimiento de fiscalización, ajustándose plenamente la multa a derecho.

**TERCERO:** Que en la audiencia preparatoria celebrada el 23 de marzo de 2023, **se llamó a las partes a conciliación** y no habiendo acuerdo entre las partes, el tribunal tuvo por frustrado dicho llamado.

En la misma audiencia, se fijó como **hecho a probar**, el siguiente: **1)** Efectividad que el fiscalizador incurrió un error de hecho en la resolución impugnada, en su caso, forma en que se verificó en los hechos este error.

**CUARTO:** Que, en la audiencia de juicio, la **parte reclamante incorporó** en la audiencia la siguiente prueba:

**Documental:**

**1)** Resolución de Multa N°1782/22/56 de fecha 30 de diciembre del 2022, de la Inspección Comunal del Trabajo La Florida, junto con su correo de notificación. **2)** Set de contratos de trabajo de los trabajadores individualizados en la Resolución de Multa N°1782/22/56. **3)** Set de Registros de Asistencia de los trabajadores individualizados en la Resolución de Multa N°1782/22/56, de mayo a octubre del 2022. **4)** Captura de pantalla de la plataforma de la Dirección del Trabajo, respecto a la “Individualización del empleador” de Tresmontes S.A.

**Exhibición de documentos:**

1. Se solicita exhibir todos los antecedentes y documentación que se tuvieron a la vista y que se entregaron al fiscalizador que resolvió cursar la Resolución de Multa N°1782/22/56 de fecha 30 de diciembre del 2022, de la Inspección Comunal del Trabajo La Florida. Asimismo, se solicita exhibir el proceso de análisis, informe de exposición, y acta de fiscalización que el fiscalizador constató en el lugar de inspección respecto de la multa antes indicada (digitalizada en la prueba documental de la reclamada)

La parte reclamante tiene por cumplida la exhibición.

**QUINTO:** Que, a su vez, la **parte reclamada incorporó** la siguiente prueba:

**Documental:**

**1)** Carátula de Informe de Fiscalización. **2)** Informe de Exposición. **3)** Resolución de Multa N° 1782/22/56, de fecha 30 de diciembre de 2022. **4)** Activación de Fiscalización de fecha 25 de octubre de 2022. **5)** Notificación de inicio de



fiscalización, Formulario PI-01-2, 07 de diciembre de 2022. **6)** Antecedentes Verificados en la Fiscalización FI-2. **7)** Ponderación de cuantía de la aplicación de multa. **8)** Correo electrónico enviado a la empresa TRESMONTES S.A. RUT: 76.388.064-8. **9)** Notificación de resolución de Multa 1782/22/56, mediante correo electrónico enviado con fecha 24 de enero de 2023.

**SEXTO:** Que valorada la prueba rendida, conforme a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, es posible **tener por establecidos** los siguientes hechos:

**1º)** La circunstancia que por Resolución de Multa N° 1782/22/56, de fecha 30 de diciembre de 2022, pronunciada por la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, se cursó una multa a la reclamante, por el siguiente hecho: “1.- *No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: - Contratos de trabajo y anexos. - Comprobantes de pago de remuneraciones desde mayo de 2022 hasta octubre de 2022, ambos meses inclusive. - Registro de asistencia mismo periodo anterior. – Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales del mismo periodo anterior. Lo anterior respecto a los siguientes trabajadores: Ester Tapia Araya, RUN 12.847.840-K Valentino Tapia Catalán, RUN 9.984.755-7 María Torres Torres, RUN 14.075.295-9 Luis Uribe Pacheco, RUN 7.934.258-0 Alex Tudela Polanco, Run 12.900.848-2 Paulina Veas Acevedo, RUN 15.719.585-9 María Vega Soto, RUN 15.719.585-9 Matías Vera Trenquin, RUN 19.142.204-K Camila Vidal Aranda, RUN 17.809.273-1 Luis Villalón Silva, RUN 20.171.862-7*”.

**2º)** La circunstancia que se sancionó a la reclamante con una multa equivalente a 26,83 IMM, ascendente a la fecha de la infracción a \$6.891.957.

**3º)** La circunstancia que no hubo solicitud de reconsideración administrativa bajo la hipótesis del artículo 511 del Código del Trabajo.

Las tres conclusiones antes señaladas son hechos pacíficos por no haberlos controvertido las partes y además, se corrobora con la prueba documental incorporada por ambas partes, particularmente la Resolución de Multa.

**4º)** La circunstancia que la fiscalización se inició el 25 de octubre de 2022, a solicitud de trabajadores, con un período investigado entre el 7 de diciembre 2022 y el 14 de diciembre de 2022 y que con fecha 7 de diciembre de 2022.

Lo anterior fluye de la prueba documental incorporada por la parte reclamada consistente en Carátula de Informe de Fiscalización y el Informe de Exposición.

**5º)** La circunstancia que con fecha 7 de diciembre de 2022, el fiscalizador se constituyó en la dirección solicitada por el denunciante (correspondiente a la empresa Lucchetti Chile S.A.), pero ahí informaron que la empresa denunciada no prestaba funciones en dicha dirección.

Así se acredita con el mérito de la prueba documental incorporada por la parte reclamada consistente en el Informe de Exposición.

**6º)** La circunstancia que con fecha 7 de diciembre de 2022, el fiscalizador envió un correo electrónico a la empresa a la casilla [dttresmontes@tmluc.com](mailto:dttresmontes@tmluc.com), informando el inicio del procedimiento de fiscalización, que se llevará a cabo en modalidad a distancia, a través del uso de plataformas electrónicas y se adjunta el documento "Notificación de Inicio de Procedimiento de Fiscalización" y se le requiere a la empresa que responda el correo remitiendo la documentación que detalla dentro



del plazo de 2 días hábiles, entre dichos documentos, se requiere la nómina de trabajadores y planilla de pago de cotizaciones.

Lo anterior se acredita con el mérito de la prueba documental incorporada por la parte reclamada consistente en el Informe de Exposición, la Notificación de inicio de fiscalización, Formulario PI-01-2, de 7 de diciembre de 2022 y el correo electrónico enviado a la empresa reclamante con fecha 7 de diciembre de 2022.

7º) La circunstancia que en los últimos 6 meses, a la reclamante se le cursaron 3 multas y en el período de 6 a 12 meses, se le cursaron 2 multas.

Así se tiene por establecido con el mérito del Informe de Exposición incorporado por la parte reclamada.

8º) La circunstancia que mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023, enviado a la casilla electrónica [dtresmontes@tmluc.com](mailto:dtresmontes@tmluc.com), se notificó la resolución de multa objeto de la presente reclamación.

Así se acredita con la prueba documental incorporada por ambas partes consistente en notificación de resolución de Multa 1782/22/56, mediante correo electrónico enviado con fecha 24 de enero de 2023.

**SÉPTIMO:** Que, la acción deducida en contra de la Resolución de multa cursada a la reclamante materia de este procedimiento, es la prevista en el artículo 503 inciso 3º del Código del Trabajo, norma que permite reclamar directamente en contra de las resoluciones de multas que establezcan sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y sus reglamentos cursados por los Inspectores del Trabajo, permitiendo que el tribunal se pronuncie sobre la procedencia de la multa cursada en toda su extensión, y respecto de los fundamentos de hecho como de derecho en que la sanción se apoya.

**OCTAVO:** Que, asimismo, conviene tener presente que el artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo, que fija las atribuciones de la Dirección del Trabajo, entre otras, faculta a ésta específicamente para fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, de modo tal que la actuación realizada por el fiscalizador se hizo dentro del marco de sus atribuciones, y que el inciso segundo del artículo 23 del mismo texto legal, dispone que los hechos constatados por el fiscalizador actuante, durante el desempeño de sus funciones, constituyen presunción legal de veracidad.

**NOVENO:** Que, como se dijo, la multa se cursó por: *“No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: - Contratos de trabajo y anexos. - Comprobantes de pago de remuneraciones desde mayo de 2022 hasta octubre de 2022, ambos meses inclusive. - Registro de asistencia mismo periodo anterior. – Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales del mismo periodo anterior. Lo anterior respecto a los siguientes trabajadores: Ester Tapia Araya, RUN 12.847.840-K Valentino Tapia Catalán, RUN 9.984.755-7 María Torres Torres, RUN 14.075.295-9 Luis Uribe Pacheco, RUN 7.934.258-0 Alex Tudela Polanco, Run 12.900.848-2 Paulina Veas Acevedo, RUN 15.719.585-9 María Vega Soto, RUN 15.719.585-9 Matías Vera Trenquin, RUN 19.142.204-K Camila Vidal Aranda, RUN 17.809.273-1 Luis Villalón Silva, RUN 20.171.862-7”. Se indica como enunciado de la infracción: *“No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización”.* Como norma infringida se señala: *“Artículo 31 del D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el artículo 32 del D.F.L.**





*Nº 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; artículo 8 de la Ley Nº 18.018 y artículo 30 del Decreto Supremo Nº 51 de 1982 del Ministerio de Justicia”.*

**DÉCIMO:** Que, la parte reclamante cuestiona la aplicación de la multa cursada, sosteniendo, en síntesis que la imputación realizada no es efectiva, por cuanto se le sanciona por no exhibir la documentación exigida para efectuar las labores de fiscalización, en circunstancias que nunca existió un requerimiento de documentación, ya que el fiscalizador concurrió a unas dependencias que no son de su propiedad, afirmando que Tresmontes S.A. no tiene domicilio en Vicuña Mackenna Nº 2600 de la comuna de Macul, ni sus trabajadores prestan servicios en dichas dependencias, sino que el domicilio de su representada y los distintos lugares donde se presta servicios, están ubicados en la Región de Valparaíso. Además, sostiene que se infringen los principios del acto administrativo, en lo relativo al sujeto pasivo del acto y al principio de culpabilidad o responsabilidad.

Por su parte, la reclamada sostiene, en síntesis, que la alegación de la reclamante referida a que nunca le fue requerida la documentación, es contradictorio con las actuaciones realizadas por el fiscalizador, reflejándose en Informe de Fiscalización y que se evidencia que sí le fue requerida la documentación que no exhibió en la fiscalización, además, de haber tomado conocimiento previamente con “inicio del fiscalización” y del motivo de la fiscalización, careciendo de sustento factico dicha alegación, agregando que la reclamante pretende excusarse de su obligación de exhibir la documentación, válidamente requerida mediante correo electrónico, registrado por la propia empresa en la Dirección del Trabajo, por el hecho de haber concurrido el fiscalizador inicialmente al domicilio indicado en la denuncia, lugar donde señala prestar servicios para la empresa Tresmontes S.A., lo que no sería un argumento válido, puesto que tanto el inicio de fiscalización y requerimiento de documentación se realizó vía remota, al correo electrónico registrado por la empleadora ante de la Dirección del Trabajo, no remitiendo la documentación solicitada por ninguna vía.

De esta forma, cabe consignar que la parte reclamante pretende justificar la ocurrencia de los hechos constatados entregando ciertos fundamentos fácticos, de contexto y normativos, sosteniendo que nunca existió un requerimiento de documentación, ya que el fiscalizador concurrió a unas dependencias que no son de su propiedad.

**UNDÉCIMO:** Que, del mérito de los hechos que se han tenido por establecidos y de los que da cuenta el motivo sexto de esta sentencia, además de los fundamentos entregados por la reclamante en su reclamo y por la reclamada en su contestación, el conflicto se reduce a determinar si los argumentos expuestos por el reclamante tienen o no el efecto pretendido, en el sentido de dejar sin efecto la multa cursada.

Al efecto, el artículo 31 del D.F.L. Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que: *“Los funcionarios del Trabajo podrán requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda y todos los datos pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Dirección del Trabajo, incluso la exhibición de sus registros contables para su examen.*



*Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones.”*

Luego, el artículo 32° del mismo cuerpo legal, agrega que: *“La infracción a las disposiciones del artículo precedente será sancionada con multa administrativa de tres sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago hasta diez sueldos vitales anuales del mismo departamento que será aplicada por el Inspector del Trabajo que la constató.”*

Por otra parte, el artículo 508 del Código del Trabajo, modificado por la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, dispone en su inciso 1° que: *“Las notificaciones, citaciones y comunicaciones legales que realice la Dirección del Trabajo se deberán efectuar mediante correo electrónico, sin perjuicio de lo señalado en el inciso siguiente. Para estos efectos, cada empleador, trabajador, organización sindical, director sindical o cualquier otra persona o entidad que se relacione con la Dirección del Trabajo, deberá registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, el que se considerará vigente para todos los efectos legales mientras no sea modificado en el portal electrónico de la mencionada Dirección. Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través de correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de la emisión del referido correo”.*

Del mérito de la prueba documental incorporada por la parte reclamada, consta que se envió correo electrónico con fecha 7 de diciembre de 2022, notificando el inicio del procedimiento de fiscalización y requiriendo documentación, a la casilla electrónica [dttresmontes@tmluc.com](mailto:dttresmontes@tmluc.com).

Así las cosas, se desprende que, la notificación de activación de fiscalización fue debidamente remitida a la reclamante a la casilla de correo informada por la misma y no es posible atender a los argumentos esgrimidos en su reclamación, en el sentido que no le fue requerida información alguna.

No obsta a la conclusión anterior, el hecho que el fiscalizador haya concurrido a un domicilio que no pertenecía a la empresa fiscalizada, tal como daría cuenta el Informe de Fiscalización y como se acredita con la documental incorporada por la reclamante consistente en los contratos de trabajo de los trabajadores individualizados en la Resolución de Multa, los Registros de Asistencia de los trabajadores y la captura de pantalla de la plataforma de la Dirección del Trabajo, respecto a la “Individualización del empleador” de Tresmontes S.A., que dan cuenta que el domicilio de la reclamante es Vicuña Mackenna 2600, comuna de Macul, toda vez que, luego de haber sido informado de tal circunstancia, el fiscalizador dio inicio al procedimiento de fiscalización en modalidad remota, enviando correo electrónico a la casilla informada por la propia reclamante.

Por lo demás, el Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, de octubre de 2021, consigna que respecto de la modalidad telemática de fiscalización no rige la limitación de jurisdicción y que dicha modalidad puede tener lugar, en materia de cotizaciones previsionales, entre otras, tal como ocurrió en el presente caso.



Del mismo modo, no escapa del análisis de este sentenciador, la circunstancia que la Resolución de Multa fue notificada al mismo correo electrónico al cual se remitió el inicio del procedimiento de fiscalización y el requerimiento de información.

En cuanto a las supuestas infracciones a los principios del acto administrativo, lo cierto es que, con la prueba rendida en juicio, no logra advertir este sentenciador alguna irregularidad en el procedimiento administrativo ni en la Resolución de Multa.

En consecuencia, con la prueba rendida en juicio por la actora, no se han logrado acreditar los errores en que habría incurrido el fiscalizador al momento de cursar la multa, teniendo la parte reclamante la carga de la prueba, razón por la que se rechazará la reclamación judicial, conforme se expone en lo resolutivo.

**DUODÉCIMO:** Que, la prueba rendida en autos ha sido analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica y el material probatorio no aludido expresamente en los considerandos precedentes en nada altera lo razonado por el tribunal.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, no obstante haber resultado totalmente vencida y estimando este tribunal que la parte reclamante ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá de la carga procesal relativa al pago de las costas.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 23 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y artículos 31 y 32 del *D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social*, artículos 420, 456, 459, 503, 506 y 508 del Código del Trabajo; se declara:

**I.-** Que se **RECHAZA**, en todas sus partes, la reclamación judicial interpuesta por don Francisco Plass Montalva, abogado, en representación de **TRESMONTES S.A.**, ya individualizados, en contra de la **INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA** y, en consecuencia, se mantiene íntegramente la Resolución de Multa N° 1782/22/56, de fecha 30 de diciembre de 2022.

**II.-** Que no se condena en costas a la parte reclamante por estimar que ha litigado con motivo plausible.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

**RIT I-89-2023.**

Dictada por don **Daniel Eduardo Leiva Rojas**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

